



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA CIVIL**

Medellín, quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2.023)

**MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS**  
**APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 002 2020 00213 01**

Proceso: Verbal - Pertenencia.  
Demandante: ALEJANDRO TIRADO CONGOTE como cesionario de los derechos litigiosos de DARÍO TIRADO MEJÍA.  
Demandados: Herederos de DOLORES LATORRE VIUDA DE PÉREZ e indeterminados.  
Extracto: Las causales de inadmisión son taxativas, por lo que al exigirse a la demanda requisitos que las desbordan, se limita indebidamente el derecho de acceso a la administración de justicia. Revoca.

**ASUNTO A TRATAR**

Se resuelve el recurso de apelación formulado por el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MinTIC), contra el auto calendado el dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

**ANTECEDENTES**

**Del auto apelado:**

DARÍO TIRADO MEJÍA demandó a los herederos de DOLORES LATORRE VIUDA DE PÉREZ y demás personas indeterminadas, en proceso declarativo de pertenencia respecto al inmueble con folio de

matrícula inmobiliaria 001-757476, trámite en el que el MinTIC se hizo presente manifestando tener interés en el inmueble.

Dentro de lo mismo el mencionado Ministerio presentó demanda de reconvención reivindicatoria, la que fue inadmitida mediante auto del diez (10) de mayo de anterior, para que dentro del término de cinco (5) días se subsanaran, los requisitos que se sintetizan así: 1) debía allegarse experticia relativa a los frutos civiles y naturales producidos por el predio en disputa; 2) Que de los oficios solicitados, la reconviniente debió acreditar que agotó las solicitudes elevadas; 3) Del juramento estimatorio, que deben discriminarse sus conceptos; y, 4) Del cumplimiento de tales requisitos allegará constancia de envío a la parte demandada.

El diecisiete (17) de mayo siguiente (2.022), la hoy impugnante solicitó adicionar el auto inadmisorio, para que se le otorgaran dos (2) meses de plazo para dar cumplimiento al requisito exigido, considerando que el Ministerio es una entidad pública que se rige por la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, y deben cumplir con la Ley 996 de 2005 (de Garantías); informando además que no cuentan con funcionarios o contratistas inscritos como peritos valuadores.

Subsidiariamente solicitó que en el evento de no acceder a lo anterior, se adicionara la providencia nombrando el Despacho un perito de la lista de auxiliares de la justicia, para que con fundamento en los documentos obrantes en el expediente y la confesión hecha por la parte demandante en la demanda principal, realizara la experticia.

Por el auto atacado el *a quo* negó la solicitud de adición, para lo que expuso que los términos procesales son improrrogables, salvo disposición en contrario (artículo 117 del C. G. del P.); y sobre la solicitud de nombramiento de auxiliar de la justicia, indicó que tampoco

era procedente porque recae en las partes probar el supuesto de hecho de las pretensiones (artículo 167 *ibid.*). Que si se pretende que se considere un dictamen pericial, le corresponde a la parte interesada allegarlo (artículo 226 procesal), o en su defecto con el escrito que subsanaba los defectos, se podría solicitar plazo para aportarlo.

Finalmente, que al haberse exigido el cumplimiento de otros requisitos que no fueron subsanados dentro del término legal, se rechazaba la demanda de reconvención.

### **Del recurso:**

Frente a tal decisión MinTIC presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que exigir la tasación del perjuicio para admitir la demanda de reconvención, es superfluo cuando los mismos se encuentran acreditados con la confesión y los documentos aportados con la demanda inicial; por lo que ello hiere el propósito de la demanda de reconvención, que pretende la reivindicación de un bien no prescriptible de la Nación.

La existencia de los perjuicios se encuentra probada, y si era necesario tasarlos, se podía allegar tal prueba en la etapa probatoria.

Que considerando la solicitud de adición y/o aclaración del auto inadmisorio, el mismo no cobraba ejecutoria hasta tanto se resolviera dicha petición, que fue mediante auto del 16 de junio de 2.022 frente al que se ahora se interpone recurso.

De otro lado, manifestó que desistía de la prueba denominada “*Oficios*” a la que hace referencia el numeral 2º del auto inadmisorio, porque los mismos habían sido aportados por la demandante inicial, así como procedió a dar cumplimiento al numeral 3º de tal decisión,

discriminando en el juramento estimatorio los conceptos solicitados como frutos civiles.

Concedido el traslado del caso, la demandante primigenia señaló que la adición de una providencia procede cuando está incompleta o hubo alguna omisión, no siendo ese el caso del auto que inadmitió la demanda, donde se concedió el término establecido por el artículo 90 inc. 4° del C. G. del P., dentro del cual no se subsanaron los defectos, lo que desencadenó el rechazo de la demanda. Además los términos procesales son perentorios e improrrogables.

Que la parte demandante en reconvención debía hacerse a las pruebas necesarias para acreditar el supuesto de hecho de sus pretensiones.

#### **De la solución al recurso de reposición:**

Se resolvió de forma negativa el recurso horizontal, bajo el argumento que la figura empleada para solicitar ampliación del término para subsanar defectos era improcedente, porque los términos procesales son perentorios e improrrogables, y al no cumplirse con los requisitos exigidos oportunamente, emergía el rechazo de la demanda.

Añadió que no era procedente la adición del auto que inadmitió la demanda, porque era a la demandante en reconvención a quien le correspondía allegar el dictamen pericial, o solicitar un plazo en el escrito que subsanaba los requisitos.

Concedida la alzada se resuelve de plano, tal como lo prevé el artículo 326 procesal civil, teniendo en cuenta que la providencia censurada es apelable, según lo normado en los artículos 90 y 321.1 del C. G. del P..

## CONSIDERACIONES

Según el artículo 320 del ordenamiento procesal civil, el recurso de apelación tiene como objetivo que el Superior funcional examine la cuestión decidida en primera instancia, con el fin de revocarla o reformarla, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, todo ello dentro del principio de limitación (artículo 328 C. G. del P.).

En la presente estudiaremos los requisitos de la inadmisión y el consecuencial rechazo del trámite, recordando que, *“Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión.”*, tal como se desprende del artículo 90 en cita, por lo que por razones metodológicas, de entrada estudiaremos la inadmisión propiamente dicha, para luego pasar al rechazo.

El citado artículo 90 procesal civil contempla los eventos para inadmitir la demanda, para que lo pertinente sea subsanado en el término de cinco (5) cinco días, so pena de rechazo, todo ello a fin de ejercer un control de legalidad temprano que garantice unos requisitos mínimos e ineludibles de cara a proferir sentencia de fondo.

Tales circunstancias de inadmisión, son taxativas, pues como dice la correspondiente norma, *“... el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos...”*, es decir, solo son las ahí previstas, de donde lo demás que se imponga obstaculiza arbitrariamente el acceso a la administración de justicia, el cual es un derecho de todas las personas, incluyendo las jurídicas, tal como lo establece el artículo 229 de la Carta Política<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sobre el punto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo sus propios precedentes y línea, precisó: *“(...) la inadmisión y el rechazo de la demanda sólo puede darse por las causales que taxativamente contempla el estatuto procesal, en tanto que la introducción de motivos ajenos a los allí dispuestos, en últimas, limita el derecho que tienen*

Los cuatro motivos de inadmisión, que los reproducimos para la claridad de la decisión, fueron:

*“1) De conformidad con el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; por lo tanto, al tenor de dicho canon en concordancia con el 226 ibidem, para que en su respectiva oportunidad sea valorado, allegará dictamen pericial elaborado por experto en la tasación de los frutos civiles y naturales producidos por el predio objeto de reivindicación, ubicado en la calle 19 A No. 27- 250 de la ciudad de Medellín, con matrícula inmobiliaria 001-535297.*

*“2) Frente a la otra prueba que solicita, que denominada, Oficios; tal y como lo disponen los artículos 167 y 173 del CGP, acreditará sumariamente la constancia de haber agotado, sin atención de parte de: La Notaría Sexta de Bogotá, Notaría Sexta de Medellín, Notaría Veintisiete de Medellín, Registrador de Instrumentos Públicos de Medellín –Zona Sur, Departamento de Catastro Municipal –Medellín, Oficina de Valorización Municipal–Medellín, las solicitudes elevadas.*

*“3) Con respecto al juramento estimatorio, discriminará cada uno de sus conceptos; toda vez que si bien en el respectivo acápite mencionada el origen de cada rubro, no los segrega de una forma clara. Artículo 206 del CGP.*

*“4) Del llenado de requisitos allegará constancia de envío a la parte demandada, Numeral 6° del Decreto 806 de 2020.”*

Pues bien, en este punto es pertinente anotar las causales de inadmisión enunciadas en el artículo 90 del C. G. del P., siendo ellas:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

---

*los coasociados a acceder a la administración de justicia (...) En cuanto al particular, esta Corporación ha considerado que: “(...) no debe perderse de vista que por expreso mandato del artículo 90 del Código General del Proceso las declaraciones de «inadmisibilidad» y «rechazo» de la demanda «solo» se justifican de cara a la omisión de «requisitos formales» (cfr. arts. 82, 83 y 87 ibíd.), la ausencia de los «anexos ordenados por la ley» (cfr. arts. 26, 84, 85, 89, 206 ibíd.), la inadecuada «acumulación de pretensiones» (cfr. art. 88 ibíd.), la «incapacidad legal del demandante que no actúa por conducto de representante» y la «carencia de derecho de postulación» (cfr. art. 73 y ss. ibíd.), ninguna de las cuales parecen ajustarse a las puntuales circunstancias esgrimidas en el sub lite... “Y aunque en algunas ocasiones esta Corporación ha visto con buenos ojos la posibilidad de adelantar en esa etapa preliminar las «pesquisas necesarias» para «aclara[r] aspectos oscuros del libelo inicial», como una «expresión fiel de los deberes que como director del proceso le asisten [al] funcionario» (CSJ, STC16187-2018), lo cierto es que tal privilegio no constituye una patente de corso para restringir la prerrogativa prevista en el canon 229 de la Constitución Política, menos aún, para comprometer el debido proceso de las personas que elevan sus súplicas ante la justicia con criterios puramente subjetivos de quienes están llamados a impulsarlas (CSJ STC2718-2021).” STC4698-2021.*

3. *Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
4. *Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*
5. *Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
6. *Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
7. *Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.*

Sobre el primer punto inadmisorio, el no allegar un dictamen por parte de quien pretende un reconocimiento resarcitorio, lo que puede producir es que el interesado no pueda obtener el efecto jurídico perseguido, tal como lo establece el artículo 167 del C. G. del P., pero en este tipo de casos la experticia no es en sí misma un anexo que ordene la ley, por lo que su omisión no encaja en el 2º supuesto normativo del artículo 90 atrás transcrito.

Valga anotar que si bien el artículo 227 del C. G. del P. prevé lo que debe cumplir quien pretenda valerse de un dictamen, ello se asocia a un lapso temporal para aportarlo, “*que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días*”, lo que dista de lo previsto en el artículo 90 en cita, coligiéndose que lo reprochado no era causa de inadmisión, sino, era un debate que debía darse en otro estadio del proceso.

El segundo requisito echado de menos por el *a quo*, al igual que el anterior, refiere a un punto propio de la carga de la prueba, mas no de acceso a la jurisdicción, por lo que el correspondiente reproche no satisface los elementos de validación para que por lo mismo se pudiera inadmitir la acción.

Del tercer requisito impuesto, el juramento estimatorio, nótese que en la demanda de reconvención, se expresó:

*“En cuanto a los frutos civiles producidos por el inmueble objeto de reivindicación, el ubicado en la calle 19 A No. 27-250 de Medellín, donde funciona una institución educativa y arrendado desde el 30 de agosto de 2012, por un canon mensual de \$15.000.000.00, a la fecha de presentación de esta demanda – 105 meses - más el arriendo de una parte de dicho predio – 15 mts<sup>2</sup> – a una empresa de comunicaciones, por valor mensual de \$1.500.000.00, desde 2009, a la fecha de presentación de esta demanda, 144 meses, para un total de \$216.000.000.00, los mismos se estiman en los términos del artículo 82 – 7 y 206 del C.G.P., en la suma de \$1.791.000.000.00.”.*

Como se ve, con lo expuesto se satisface lo censurado en el numeral 6º de tal artículo 90, y esto es, que se presentó un juramento estimatorio como tal. Ahora, en el auto inadmisorio se reclamaba que lo mismo fuera detallado en cada uno de sus conceptos, que se dijera el origen de cada rubro; pero resulta que ello no lo exige la norma, sino, se insiste, solo que se presente el juramento.

Claro que el artículo 206 procesal, sí indica que tal juramento en su presentación, ha de ser *“discriminando cada uno de sus conceptos.”*, y revisando como se presentó la solicitud, ahí se particularizó en los detalles, pues en los mismos se expresó periodos de tiempo y réditos, con lo que se satisface el requisito, sin que hubiera lugar para inadmitir.

Ya el último requisito, es que se allegara una constancia de envío, atestación esta que no la impone ninguno de los supuestos para inadmitir que contempla el artículo 90, por lo que este aspecto tampoco podía ser argumento para rechazar la demanda.

Por lo expuesto, el Tribunal;

RESUELVE



PRIMERO: REVOCAR el auto calendado el dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo, sin que se pueda rechazar la demanda de reconvención por las circunstancias aquí debatidas. Sin costas.

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', is written over a faint, larger signature.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO